

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA (REPARTO)

E.S.D.

DEMANDANTE: ROSIO GUTIERREZ OQUENDO

DEMANDADO: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. No. 94.268.736 y la T. P. No. 121608 del C. S. de la J., actuando como apoderado de la señora **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO**, mayor de edad, vecina del Municipio de Restrepo Valle del Cauca, identificada con la C.C. No. 29.227.506 de Buenaventura (V), mediante el presente escrito, interpongo demanda por el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho contra la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, pretendiendo se *nuliten* actos administrativos que le niegan a la demandante la reparación individual por vía administrativa, por los hechos victimizantes de vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados y el homicidio de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, acaecido el día 18 de Junio 2014, en en la vereda Guisito del Municipio del Tambo Cauca, mediante los Actos Administrativos contenidos en la Resolución No. 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013, la Resolución No. 2013-125073R del 25 de Septiembre de 2015, que resolvió el recurso de reposición que decidió No reconocer el hecho victimizante de La Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha el recurso de apelación concedido en el Acto Administrativo que resolvió el recurso de reposición el día 25 de Septiembre de 2015; de igual manera le negó la inclusión como víctima de homicidio, mediante la Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015, que decidió No reconocer el hecho victimizante de **HOMICIDIO**, de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ** y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha los Recursos de Reposición y Apelación interpuestos contra la Resolución 2015-48799 del 24 de febrero de 2015

Solicitud que fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Mediante la Resolución No. Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015, la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, negó la inclusión del Hecho Victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades con grupos armados del hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, como víctima de la violencia, en hechos acaecidos en el año 2010 en el Municipio de El Dovio Valle..
2. Hasta la fecha no se ha resuelto el recurso de apelación surgiendo el acto ficto o presunto surgido al no resolverse el recurso de apelación concedido en la Resolución que resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa
3. El hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, despues de haber sido vinculado como menor de edad en el Dovio Valle, a grupos armados por fuera de la Ley, en el año 2010, fue asesinado selectivamente el día 18 de junio de 2014, en en la vereda Guisito del Municipio del Tambo Cauca.
4. Mediante la Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015, la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, negó la inclusión del Hecho Victimizante de Homicidio del hijo de mi poderdante **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**.
5. Mi poderdante presento el respectivo recurso de reposición en subsidio el de apelación y hasta la fecha no se han resueltos los dos recursos tanto el de Reposición como el de Apelación surgiendo el Acto Ficto o Presunto surgido al no resolverse el Recurso de Apelación...
6. La entidad considera para negar: " Que una vez valorada la declaración rendida por **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO** se encontro que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante en el Registro Único de Víctimas – RUV, del hecho victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, por cuanto en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determino que los hechos ocurrieron por causas diferentes a

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmai.com

lo dispuesto em el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. de conformidad con el artículo 40 del Decreto 4800 de 2011.

7. De acuerdo a las circunstancias expuestas por la deponente ROSIO GUTIERREZ OQUENDO, en el Registro Único de Víctimas, al considerar que: "De acuerdo a la norma precitada, la afirmación de la deponente y em aras de garantizar el derecho de igualdad de las víctimas, La Ley 1448 de 211 em el artículo 190 há dispuesto, que para que el hecho victimizante por Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados sea reconocido, la persona víctima de estos hechos, debe contar con la certificación de desvinculación del grupo armado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejeción de las Armas CODA, esta certificación se otorga una vez el niño, niña o adolescente haya cumplido la mayoría de edad. Fundamento jurídico que sumado a la narración de los hechos, es posible decir que aunque el hijo de la recurrente presuntamente fue reclutado forzadamente por parte de un grupo al margen de la ley. No se encontro certificación expedida por el Comité Operativo par la dejación de las Armas CODA. Única excepción para poder reconocer como víctimas en los términos de la Ley 1448 de 2011, a las personas quienes han sido parte activa del conflicto armado interno como integrantes de grupos al margen de Ley"

De igual manera en el hecho victimizante de Homicidio, en donde fuese víctima el señor LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ, es preciso mencionar el parágrafo 2, artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, "Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la Ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos em que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la Ley siendo menores de edad (...) situación que no es posible determinar en la presente narración y que además se logra establecer que para el momento de los hechos el señor contaba con 19 años de edad y por demás no cuenta con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejeción de las Armas. Por tanto la presente declaración se enmarca dentro de los parámetros de no inclusión establecidos por la Ley y en consecuencia se procede a no reconocer el hecho victimizante de homicidio a la declarante y a su grupo familiar

Resuelven, No INCLUIR a mi poderdante en el Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER el hecho victimizante de homicidio.

8. Por lo anterior mi mandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la referida resolución, recurso en el cual argumentaba:

"No comparto cual fue el criterio que tuvo los funcionarios de la Unidad de Víctimas de analizar mi caso, toda vez que han violado los criterios técnicos como Tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del homicidio de mi hijo LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ, el día 18 de junio de 2014 en la vereda Guisito del Municipio de Tambo Cauca, por la Guerrilla de las FARC.

Sea lo primero advertir que mi hijo fué vinculado por el hecho victimizante: **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, ya que de acuerdo a las pruebas notorias que voy a aportar los que se llevaron a mi hijo fue la Guerrilla del ELN, que siempre han operado en las diferentes masacres que se ocurrieron en Trujillo Valle, a raíz de las muertes selectivas.

Es de hecho notorio que en el municipio de EL DOVIO VALLE, operaron diversos grupos al margen de la Ley y de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos en el Municipio de EL DOVIO VALLE, Paralelo a este proceso, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrio, El Dovio y Trujillo. Sin embargo, sus proyectos expansivos se vieron afectados notoriamente con la llegada de grupos paramilitares a cargo del Cartel del Norte del Valle, entre 1988 y 1994.¹³ Esta situación obligó al grupo guerrillero a redefinir sus estrategias e iniciar un proceso de reestructuración, que condujo a la creación del frente José María Becerra y el frente urbano Omaira Montoya. Restrepo Valle.

Los grupos paramilitares, por su parte, ingresaron en el escenario local a finales de la década de los años ochenta, con lo cual se redefinió la correlación de actores y se inició una ofensiva armada dirigida a proteger los laboratorios del narcotráfico.¹⁵ Para 1999 las confrontaciones entre clanes del narcotráfico con (Varela y Herrera) y la intensificación de sus negocios ilícitos, incentivó la conformación de cuerpos armados privados, vinculados con el bloque Calima y el frente pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

Solamente entre 1988 y 2003, el fenómeno paramilitar generó 722 ejecuciones extrajudiciales y 172 desapariciones forzadas en este territorio. El epicentro fue la zona occidental del departamento, principalmente el municipio de Trujillo, donde, como se explica más adelante, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.¹⁷.

El informe recuenta como entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Dolívar y Riofrio (noroccidente del departamento del Valle), se registraron 342 víctimas de homicidio, tortura, y desaparición forzada como producto de un mismo propósito criminal. En esta larga cadena de crímenes de carácter generalizado y sistemático, las desapariciones de la Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de 1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona. Las responsabilidades por estos crímenes implican a miembros de la fuerza pública, pues hubo planeación y acción conjunta entre los militares y las estructuras criminales del narcotráfico para la comisión de los crímenes. Esto ya había sido reconocido por la comisión de Verificación de los Hechos Violentos de Trujillo en 1995, creada con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reclutamiento de mi hijo y el hecho victimizante de **Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos al margen de ley**, fue por estos grupos al margen de Ley Guerrilla que siempre ha operado en ese sector y por los límites entre el Cañón de garrapatas, anexo Revista Semana fecha 9 de octubre de 2009, tres (3) folios.

Ahora bien LA UNIDAD DE VICTIMAS, me negó el Hecho Victimizante de Vinculación de menores a actividades relacionados con grupos al margen de Ley, al respecto están muy equivocados porque no hay revisa a fondo mi situación, ahora la Guerrilla de las FARC, me entregan a mi hijo **ASESINADO SELECTIVAMENTE, CON ARMA DE FUEGO, CON VARIOS IMPACTOS SOBRE SU HUMANIDAD**, y según ustedes no y que mi hijo nunca se entregó o lo entregaron y menos aún le iban a entregar un certificación por parte de la guerrilla de que estuvo militando con ellos porque el no era guerrillero, lo tuvieron forzosamente hasta que lo asesinaron.

Mi hijo lo aprendieron en el Dovio Valle, y me lo entregan muerto, será que no hay una revisión de fondo ante tal situación y violación internacional de Derechos Humanos, al reclutarlo a la fuerza siendo menor de edad y luego me lo entregan **ASESINADO SELECTIVAMENTE**, será que no valoran ustedes que debido a ello fue también mis declaraciones por desplazamiento forzado.

Acaso la Unidad de Víctimas hizo un análisis fuerte, detallado y profundo sobre el la jurisdicción del municipio de El Tambo Cauca.

Es absurdo que me diga la Unidad de víctimas, que mi hijo no fue asesinado por **GRUPOS AL MARGEN DE LEY**, porque no hay una certificación de un **COMITÉ OPERATIVO DE DEJACION DE ARMAS**, y entonces en donde queda la muerte selectiva, ya que fue asesinado con arma de fuego.

En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvo quienes fueron los que asesinaron selectivamente a mi hijo.

No puede pasar por alto la Unidad de Víctimas, que lo que estoy reclamando es la muerte y el **HOMICIDIO SELECTIVO** de mi hijo, y por en el lugar y jurisdicción del Municipio del Tambo Cauca, efectivamente hay presencia de guerrilla y mi hijo fue seleccionado, por la guerrilla de las FARC, anexo documento en dieciocho (18) folios"

9. Mi poderdante es víctima del conflicto armado interno pues esta incluida en el Registro Único de Víctimas por el Hecho Victimizante de Desplazamiento Forzado.
10. Ahora el argumento es confuso, pues la Honorable Corte Constitucional ha precisado, en el Auto 119 de 2013, proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia 7-025 de 2004 que decretó una estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada.

El documento de 70 páginas establece que es inconstitucional la negación por parte de la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas de personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada, como las víctimas de las Bacrim, y, en términos más amplios,

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

en aquellas circunstancias en las que el desplazamiento no guarda una relación cercana ni suficiente con el conflicto.

Ahora bien, la Sala Especial estableció que los criterios que tiene la Dirección de Registro para evaluar si los hechos en que se produjo un desplazamiento tiene o no estrecha relación con el conflicto, no van de la mano con los que ha establecido la Corte Constitucional. Esto, por ejemplo, porque se da mucha importancia la rólulo del actor que produjo el daño.

"Esta Sala Especial advierte que el 'rólulo' o denominación del actor como parte del conflicto armado o de la delincuencia común, no puede ser un argumento a priori y formal para definir de antemano si un determinado daño se enmarca o no dentro del conflicto armado (...) La calificación del actor como grupo organizado al margen de la ley tampoco debe ser un requisito para considerar que el daño guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto armado", señaló la Sala.

11. Es de hecho notorio que en el municipio de EL DOVIO VALLE, operaron diversos grupos al margen de la Ley y de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos en el Municipio de EL DOVIO VALLE, Paralelo a este proceso, el ELN se asentó en el Valle del Cauca a mediados de los ochenta con el frente Luis Carlos Cárdenas, que operaba en los municipios de Riofrio, El Dovio y Trujillo. Sin embargo, sus proyectos expansivos se vieron afectados notoriamente con la llegada de grupos paramilitares a cargo del Cartel del Norte del Valle, entre 1988 y 1994.¹³ Esta situación obligó al grupo guerrillero a redefinir sus estrategias e iniciar un proceso de reestructuración, que condujo a la creación del frente José María Becerra y el frente urbano Omaira Montoya. Restrepo Valle.

Los grupos paramilitares, por su parte, ingresaron en el escenario local a finales de la década de los años ochenta, con lo cual se redefinió la correlación de actores y se inició una ofensiva armada dirigida a proteger los laboratorios del narcotráfico.¹⁵ Para 1999 las confrontaciones entre clanes del narcotráfico con (Varela y Herrera) y la intensificación de sus negocios ilícitos, incentivó la conformación de cuerpos armados privados, vinculados con el bloque Calima y el frente pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Solamente entre 1988 y 2003, el fenómeno paramilitar generó 722 ejecuciones extrajudiciales y 172 desapariciones forzadas en este territorio. El epicentro fue la zona occidental del departamento, principalmente el municipio de Trujillo, donde, como se explica más adelante, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

12. Pasa por alto la Unidad de Víctimas que el asesinato del hijo de mi poderdante señor **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, debe ser incluido en el Registro Único de Víctimas por Homicidio toda vez que si bien es En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvieron quienes fueron los que asesinaron selectivamente a su hijo.

No puede pasar por alto la Unidad de Víctimas, que lo que esta reclamando mi poderdante es la muerte y el **HOMICIDIO SELECTIVO** de su hijo, y por en el lugar y jurisdicción del Municipio del Tambo Cauca, efectivamente hay presencia de guerrilla y su hijo fue seleccionado, por la guerrilla de las FARC.

Actualmente a la Fuerza Pública del municipio de el TAMBO, recibe una bonificación por trabajar en Zona de Orden Público, aún permanece esa connotación y así lo han establecido las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de que en el municipio del Tambo Cauca se mantiene presencia Guerrillera de las FARC.

Existe contradicción del Comité de la Unidad de víctimas, puesto que es de hecho notorio que el municipio de El Tambo Cauca ha permanecido guerrilla de las FARC.

No tiene por qué exigirse una certificación de dejación de armas, si el hijo de mi poderdante no era guerrillero voluntario, antes por el contrario fue **RECLUTADO FORZOSAMENTE**, y estuvo sometido hasta que tenía 18 años y medio donde se lo entregan asesinado en otro departamento.

Que, por tanto, en aplicación del principio de buena fe y de conformidad al Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 la Unidad Administrativa deberá reconocer a **ROSIO GUTIERREZ OQUENDO**, en su calidad de MADRE, y estara llamada a ser reconocida como víctima del

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

homicidio en razón de la sentencia C-052 de 2012, según la cual también se considera víctima a quien acredite [] dos circunstancias fácticas que condicionan ese reconocimiento, como son la muerte o desaparecimiento de la llamada víctima directa y la existencia de una específica relación jurídica o de parentesco respecto de aquella [] .

En el observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica de Colombia es claro en demostrar y verificar que el contexto de la Zona del Municipio del Tambo Cauca hay presencia actual de Guerrilla de las FARC, y en el año 2014, de igual manera estuvo quienes fueron los que asesinaron selectivamente a su hijo.

13. Mediante Conciliación Extrajudicial de la Procuraduría 10 Judicial II Para Asuntos Administrativos, de Bogotá, Radicación No.2016-207 del 26 de mayo de 2016, se declaró fracasada el tramite conciliatorio.
14. Es claro que las medidas de reparación implican la existencia de un daño derivado de la comisión de un hecho antijurídico, sea un delito o una violación de derechos humanos.
15. Los beneficiarios de estas medidas son las personas reconocidas como víctimas y su propósito es el restablecimiento de los bienes y derechos afectados como consecuencia del daño.
16. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.
17. Igualmente están pasando por alto, lo dispuesto en el último inciso del Artículo 3° de la Ley 1448 de 2012, "(...) La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. (...); pues para nadie es un secreto que generalmente los crímenes en nuestro país quedan impunes, y el de mi padre no fue la excepción.
18. Ahora, la decisión es contraria a lo dispuesto en el Artículo 5° de la ley 1448 de 2011 que establece: "(...) ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. (...)"
19. También contraviene lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011, "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones". Artículo 19. Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima 6. El derecho a un trato digno. 7. Hábeas Data (...)"
20. Ahora la valoración debe tener en cuenta los siguientes criterios ampliamente definidos por la Corte Constitucional al momento de valorar el reconocimiento de las víctimas como son:
 - La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos
 - La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
 - La situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de inteligencia del Estado relacionados con los hechos.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

- La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante organismos internacionales.
- El riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo
- Las modalidades y circunstancias del hecho.
- La amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
- Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el género y ocupación.
- La inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas.

Fundamentado en las anteriores razones de hecho y derecho, solicito se hagan las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos que niegan la inclusión del Señor **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, como víctima del conflicto armado, en hechos acaecidos el día 30 de Junio de 1995, en el Municipio de El Bagre Antioquia, mediante los Actos Administrativos contenidos en la Resolución **No. 2013-125073 del 22 de Marzo de 2013**, la **Resolución No. 2013-125073R del 25 de Septiembre de 2015**, que resolvió el recurso de reposición que decidió No reconocer el hecho victimizante de La Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ**, y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha el recurso de apelación concedido en el Acto Administrativo que resolvió el recurso de reposición el día 25 de Septiembre de 2015; de igual manera le negó la inclusión como víctima de homicidio, mediante la **Resolución No.215-48799 del 24 de febrero de 2015**, que decidió No reconocer el hecho victimizante de **HOMICIDIO**, de su hijo **LUIS CARLOS RIASCOS GUTIERREZ** y el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO** que surgió de no resolverse hasta la fecha los Recursos de Reposición y Apelación interpuestos contra la **Resolución 2015-48799 del 24 de febrero de 2015**; lo pedido es la revocatoria de los referidos actos administrativos, reconociéndole la reparación administrativa contemplada en la Ley de Víctimas.
2. Que como consecuencia se reconozca la reparación administrativa a la Señora demandante.
3. Que se ordene el pago de la indemnización administrativa contemplada en la Ley de Víctimas – 1448 de 2011.
4. Que se RECONOZCA por concepto de perjuicios morales la suma de SETENTA SALARIOS salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 SMMLV), que hoy corresponden a \$48.261.780 (CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE)

ARGUMENTOS JURIDICOS

NORMAS VIOLADAS

-CONSTITUCIONALES:

Artículos 2, 13 y 29, entre otros.

LEGALES:

Ley 1448 de 2011, art 5

Decreto 4800 de 2011

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

CONCEPTO DE VIOLACION

Los actos administrativos que desconocen la calidad de víctima del hoy demandado desconocen lo preceptuado en los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución, igualmente lo dispuesto en las normas legales que a continuación me referire:

El Artículo 5° de la ley 1448 de 2011 que establece: "(...) ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. (...) "

El Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011, "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones". Artículo 19. Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima. 6. El derecho a un trato digno. 7. Hábeas Data (...).

Ahora la Sentencia C-253A/12, que estudio la Constitucionalidad de la Ley de Víctimas, preciso: "(...) La Ley dispone que son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado, definición ésta con un alcance operativo que se orienta a fijar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la ley, en la que también se parte de un reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello, consagra los principios de buena fe, encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición ya que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario (...)"

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

Señala el literal c) del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de 2002. Sentencia C-578 de 2002 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)

"c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949[7], a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa".

- i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
 - ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;
 - iii) La toma de rehenes;
 - iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
- d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar".

Se observa que la disposición no circunscribe el deber de los Estados ni el correlativo derecho de las víctimas a vulneraciones acaecidas dentro del marco de determinadas acciones, dejando a un lado otras, toda vez que el objetivo de la disposición internacional tiene que ver con la protección de la población civil afectada por el

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

conflicto armado, por actos de violencia contra la vida, la dignidad humana y la libertad personal, cualquiera fuere la forma o modalidad de la infracción.

LOS ESTADOS NO PUEDEN HACER RESPONSABLES A LAS VÍCTIMAS DE SUS OMISIONES

El primero entre los treinta y ocho (38) Principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72, expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

"La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones".

Señala el Principio Diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y *"adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente"* y ii) que, *sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental "interesada (...) como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos"*.

Los Principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto *"no existan recursos eficaces contra esa infracción"* y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de *"las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación"* –Principios 22 y 23–.

En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir *"medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional"*, sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración –artículo 2° C.P. Principio 34–.

En términos generales, cuando alguien ha realizado un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona le genera la obligación de realizar en provecho de ésta una prestación resarcitoria, comoquiera que ésta no está obligada a soportar la conducta antijurídica de la que fue objeto. En este sentido el artículo 2341 del Código Civil establece que *"el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido"*.

Cuando las conductas trascienden el campo de las relaciones personales y tienen una repercusión social, el derecho sanciona ese comportamiento con la finalidad de proteger no sólo el interés o bien individual sino también el social, lo que constituye el objeto jurídico del delito y genera la acción penal pública que por regla general corresponde emprender de oficio al Estado.

De este modo, el daño producto del delito tiene dos connotaciones "a) el daño público o social que se produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo, imponiendo las sanciones a quien ha infringido el orden jurídico, pues el delito es siempre un hecho que perjudica a la comunidad y b) el daño particular que se produce con la lesión del bien jurídico, conocido como daño civil, da lugar a la acción civil para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el ilícito, estabiéndose por el ordenamiento jurídico la obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales como materiales.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

como expresamente el artículo 94 del Código Penal lo dispone al consagrar que "la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquélla.

Postulado que resulta acorde con la disposición Constitucional que le impone a la Fiscalía General de la Nación, como ente encargado de adelantar el ejercicio de la acción penal, "solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito" (numeral 6° del artículo 250).

Bajo esta misma premisa, está consagrada la responsabilidad patrimonial del Estado frente al acaecimiento de un daño antijurídico, al respecto el artículo 90 de la Constitución Nacional establece que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas".

En el campo internacional en materia de la protección de los derechos humanos fundamentales y su vínculo con la reparación frente a la vulneración de éstos, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007 consagró una serie de Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y entre éstos dispuso:

"...VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos

11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

a) Acceso igual y efectivo a la justicia;

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación....".

Del mismo modo el numeral 1° del artículo 63 de la Convención Americana sobre derechos humanos establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,... dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada....".

Así, las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo y que desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de circulación, de residencia, elección de profesión u oficio, entre otros, que implicaron su desarraigo y el sometimiento a unas circunstancias ajenas a su existencia y a la ausencia de condiciones mínimas de existencia, de allí la procedencia de la reparación del daño sufrido.

De este modo las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del daño causado.

PRINCIPIO 1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ESTADOS DE ADOPTAR MEDIDAS EFICACES PARA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD

La Impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel.3116352665 mafechea@hotmail.com

(...)

IV. DERECHO A OBTENER REPARACIÓN/GARANTÍAS DE QUE NO SE REPITAN LAS VIOLACIONES

A. El derecho a la reparación

PRINCIPIO 31. DERECHOS Y DEBERES DIMANANTES DE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.

(...)" Asimismo, la Resolución 60/147 precedentemente citada declara en el Principio IX De la reparación de los daños sufridos que:

"...Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima..."

De los principios internacionales de protección de derechos humanos, se desprende que la exigencia del derecho a la reparación de las víctimas de las violaciones flagrantes de derechos humanos, no está subordinada al proceso de investigación que debe el Estado adelantar contra el victimario, comoquiera que éstas deben ser satisfechas en primer lugar por el Estado, porque éste es el principal garante de los derechos fundamentales, porque la condición de víctima y los derechos que de ésta se derivan no dependen de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario y porque el Estado tiene la facultad de repetir contra el autor del delito, y ello es así porque precisamente es el Estado el que tiene el deber y la facultad de perseguir a quien violó flagrantemente los derechos fundamentales, él únicamente posee la potestad de castigar a quien infringió la norma, es decir, de hacer respetar sus leyes, las cuales deben tener como finalidad la protección de los derechos fundamentales no sólo para que éstos no sean transgredidos, sino también para que cuando sean vulnerados se repare como consecuencia del daño infringido.

De este modo, si no es perseguido y no es castigado el victimario, esta carga no debe ser soportada por la víctima, pues no la puede cumplir, es solo el Estado el que la debe asumir, y si en eso falla, ha de asumir la obligación de reparación y conservar la facultad de repetir contra el victimario.

El daño acaecido por la violación flagrante de los derechos humanos, genera a favor de la víctima el derecho fundamental a la reparación de los perjuicios directamente ocasionados con la trasgresión, a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional. La exigencia y la satisfacción de este derecho fundamental se dan independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario, debido a que aquel deriva precisamente de la condición de víctima, cuyos derechos corresponde al Estado salvaguardar, sin perjuicio de que pueda repetir contra el autor.

PRUEBAS

Solicito tener como pruebas las siguientes:

Documentales

Que se acompañan con la demanda

Actos Administrativos demandados:

- Resolución No. 2013-125073R del 25 de Septiembre de 2015, cuatro (4) folios
- Resolución No. 2015-48799 del 24 de Febrero de 2015, tres (3) folios.
- Copia del registro civil de nacimiento No.24433841, a nombre de Luis Carlos Riascos Gutierrez, un (1) folio.
- Copia registro civil de defunción No.08104119, a nombre de Luis Carlos Gutierrez, un (1) folio.

MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ

Abogado Especializado

Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle Cel. 3116352665 mafechea@hotmail.com

- Copia de la Conciliación Extrajudicial, Procuraduría 10 Judicial II para Asuntos Administrativos en Bogotá, con fecha 26 de mayo de 2016, un (1) folio.
- Copia del Recurso de Reposición en Subsidio el de Apelación, frente a la Resolución No.2013-125073 del 22 de Marzo de 2013, cinco (5) folios.
- Copia del Recurso de Reposición en Subsidio el de Apelación, frente a la Resolución No.2015-48799 del 24 de Febrero de 2015, cuatro (4) folios.

Que se requieren oficiar

Que se oficie a la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL**, para que remita el expediente administrativo.

CUANTÍA

La cuantía la estimo en una cifra aproximada de CIENTO CUARENTA salarios mínimos mensuales legales vigentes (140 SMMLV), que hoy corresponden a \$96 523 560 (NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

ANEXOS

Poder a mi favor.
Documentos aducidos como pruebas.
Copia de la demanda con sus anexos para el traslado.
Copia de la demanda para el archivo del Juzgado.
Copia de la demanda y anexos físicos y en mensaje de datos (Digital).


NOTIFICACIONES

La demandante y las mías las recibiré en la Carrera 9 Calle 12, Oficina 101, Barrio Centro Restrepo Valle

La entidad demandada, en la Calle 16N No.9N-50, Barrio Granada, Telefono 6612847, Cali, Valle del Cauca,
Notificación Correo electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
notificacioneslex1@unidadvictimas.gov.co

Notificación Correo Electrónico: de la demandante y la mía: mafechea@hotmail.com Celular: 3116352665.

Atentamente,


MARIO FERNANDO ECHEVERRY ALVAREZ
C.C. No. 94.268.736 de Restrepo Valle
T. P. No. 121.608 del C. S. de la J.